

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-2493-2022
CARATULADO : BOTTINI/FISCO (CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO)

Santiago, veintiuno de Diciembre de dos mil veintitrés

VISTOS:

A **folio 1**, comparece el abogado Nelson Guillermo Caucoto Pereira, domiciliado en Doctor Sótero del Río 326, oficina 1104, Santiago, en representación judicial de **LIDIA CECILIA BOTTINI MARIN**, psicóloga, domiciliada en Urbanización Villa Colonial, calle Morichal 302, Los Robles, Municipio Maneiro, Estado de Nueva Esparta, Venezuela, interponiendo demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario, en contra del **FISCO DE CHILE**, representado legalmente por Juan Antonio Peribonio Poduje, presidente del Consejo de Defensa del Estado, con domicilio en Agustinas 1225, piso 4º, Santiago, solicitando se le condene a pagar a la demandante la suma de \$200.000.000, o aquella que se estime en derecho, más reajustes de acuerdo al IPC e intereses desde la fecha de interposición de la demanda, todo con costas.

Señala que su representada se encuentra calificada como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecida por el Decreto Supremo N° 1.040, del año 2003, del Ministerio del Interior, conocida como Comisión Valech I, bajo el número 3275.

Refiere que la demandante fue detenida ilegalmente el día 11 de septiembre de 1973 en horas de la noche, desde su domicilio donde fue



Foja: 1

trasladada al edificio del Ministerio de Defensa, lugar donde fue interrogada, violada y también le robaron dinero que tenía escondido en sus prendas. Posteriormente fue trasladada al Estadio Chile, lugar donde continuaron las interrogaciones marcadas por el hostigamiento y la violencia, luego de varios fue dejada en libertad, busco refugio en la embajada de Venezuela para regresar a su país de origen.

Añade que tras el episodio de la violación, quedó embarazada, hecho que tras conversarlo con su marido luego de su liberación, pues también estuvo detenido más de un mes en el Estadio Nacional, decidieron mantenerlo en secreto para proteger al niño y evitar más heridas.

Manifiesta que los daños sufridos por su representada producto de la detención ilegal y el sometimiento a tratos crueles e inhumanos en su contra, permanecen intactos pese al transcurso del tiempo.

Como fundamentos jurídicos de su pretensión señala en primer lugar, que los hechos denunciados se encuadran en un crimen de lesa humanidad, luego trata la responsabilidad del Estado e invoca el artículo 38 inciso 2° de la Constitución Política y cita jurisprudencia; seguidamente profundiza en la responsabilidad del Estado desde la óptica del Derecho Internacional, señalando la improcedencia de aplicar las normas y principios del derecho privado en estos casos, particularmente trata en extenso la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad; finaliza citando jurisprudencia.

A folio 7, rola el acta de la notificación de la demanda, practicada de conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, el día 04 de mayo de 2022.

A folio 8, compareció el Fisco de Chile, representado por la abogada Procuradora Fiscal (S) de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, Carolina Vásquez Rojas, contestó la demanda civil de indemnización de perjuicios y solicitó su rechazo en todas sus partes, con costas.



Foja: 1

Como primera defensa opuso la excepción de reparación integral, sosteniendo que resulta improcedente la indemnización alegada por haber sido reparado el demandante, principalmente a través de tres tipos de compensaciones, (a) reparación mediante transferencias directas de dinero, (b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, y (c) reparaciones simbólicas.

Hace hincapié que en la especie, el actor ha percibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N°19.992 y sus modificaciones, sobre prisioneros y torturados políticos; estableciéndose una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad, a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de Prisioneros Políticos y Torturados” de la nómina de personas reconocidas como víctimas. Adicionalmente, el actor recibió Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

Agrega que a los beneficiarios, tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, les fue concedido el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en servicios de salud del país, agregando que también se les otorgaron beneficios educacionales, consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores, a través de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación; y asimismo, beneficios en vivienda; de lo que resulta concluir que los referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños, no pudiendo ser, entonces, reparados nuevamente; citando jurisprudencia relativa a tal situación.

En segundo lugar, opuso la excepción de prescripción extintiva de 4 años con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, puesto que de acuerdo con el relato fáctico de la demandante, la privación de libertad y torturas ocurrió hasta octubre de 1973. En efecto aun cuando se considerase



Foja: 1

que la prescripción estuvo suspendida durante el período de la dictadura militar, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el **04 de mayo de 2022**, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332. En subsidio, alegó la prescripción extintiva de 5 años contemplada en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Añade que los tratados internacionales que rigen en esta materia, no establecen de manea explícita la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria civil, por lo que no existiendo una norma especial debe recurrirse al derecho común; pues cualquiera sea el origen o naturaleza de la indemnización de perjuicios, su contenido es netamente patrimonial.

Destaca que Chile, al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana, formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, esto es, el 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

En subsidio, sostiene que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales. Por último, expresa su posición sobre la improcedencia del cobro de reajustes e intereses.

A folio 12, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, controvirtiendo las excepciones y/o defensas formuladas por el Fisco de Chile.

A folio 16, el Fisco de Chile evacuó la dúplica, reiterando e insistiendo en sus excepciones y/o defensas de fondo.



Foja: 1

A **folio 17**, mediante resolución de fecha 29 de junio de 2022, se omitió el llamado a conciliación y se recibió la causa a prueba.

A **folio 41**, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: A folio 1 comparece el abogado Nelson Guillermo Caucoto Pereira, en representación judicial de **LIDIA CECILIA BOTTINI MARIN**, interponiendo demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario, en contra del **FISCO DE CHILE**, solicitando se le condene a pagar a la demandante la suma de \$200.000.000, o aquella que se estime en derecho, más reajustes de acuerdo al IPC e intereses desde la fecha de interposición de la demanda, todo con costas; fundada en las consideraciones de hecho reseñadas sintéticamente en la parte expositiva

SEGUNDO: Que, notificada legalmente la demanda, fue contestada conforme las alegaciones y defensas resumidas en la parte expositiva, mismas que las partes replicaron y duplicaron oportunamente.

TERCERO: Con el objeto de acreditar sus dichos, la parte demandante rindió prueba consistente en:

I.- Instrumental:

A folio 1:

1.- Copia digitalizada de los antecedentes ficha de ingreso preso Político y Torturado, que tuvo a la vista la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, o Comisión Valech I, y otorgados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

2.- Copia digitalizada de la sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 1092-15, dictada el día 14 de septiembre de 2015.

A folio 26:

3.- Copia digitalizada de la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, Rol N° de ingreso N° 8105-18, de fecha 13 de junio del año 2018.



Foja: 1

4.- Copia digitalizada de la sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH, caso Órdenes Guerra y Otros vs Chile, de fecha 29 de noviembre de 2018.

5.- Copia de contestación del Estado de Chile ante la Corte Interamericana de DD.HH, caso Órdenes Guerra y Otros vs Chile.

6.- Copia de Certificado N° 085, de octubre de 2022, suscrito por los profesionales de PRAIS de Arica, psicóloga Jeannette Valenzuela Navarrete y por la coordinadora del Servicio.

I.- Testimonial:

A folio 34, rolan las declaraciones de los testigos presentados por la demanda en el escrito agregado a folio 22, **Martín Correa Peña**, licenciado en comunicación social; y **Taide Ojeda Negretti**, economista, quienes legalmente juramentados y sin tacha declararon al tenor del punto de prueba N°3, a saber:

Punto 3 “...Existencia, naturaleza y monto de los perjuicios reclamados por la demandante...”.

Correa Peña, básicamente en su declaración ratificó los hechos denunciados y vivenciados por la actora durante su detención ilegal, así como también de los daños psicológicos y mentales que ello le produjo.

Ojeda Negretti, en síntesis, también ratificó los hechos que violaron los derechos fundamentales de la actora y los daños psíquicos que dicho episodio le irrogaron.

CUARTO: A su turno la parte demandada solicitó, en el primer otrosí de folio 9, oficio al Instituto de Previsión Social para informe sobre los montos percibidos por la demandante Lidia Bottini Marín, especialmente en relación a las leyes 19.123, 19.234, 19.992, 20.874.

A folio 13, se agregó el informe del Instituto de Previsión Social, el cual señala, en síntesis, que la actora **Lidia Cecilia Bottini Marín, cédula de identidad 7.749.858-3**, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura



Foja: 1

(Ley Valech), es beneficiaria de: **(a)** la Ley 19.992, percibiendo la suma \$29.968.317 por concepto de pensiones; **(b)** la Ley 20.874, percibiendo la suma \$1.000.000, como Aporte Único Ley 20.874; **(c)** Aguinaldos, por la suma de \$519.176 y **(d)** percibe una pensión mensual, la mes junio de 2022, de \$227.185.

QUINTO: Que, son hechos que constan en la causa por no haber sido objeto de controversia, más aún se encuentran acreditados con el mérito de los documentos reseñados en los motivos anteriores, los siguientes:

1.- Que la actora Lidia Cecilia Bottini Marín, cédula de identidad 7.749.858-3, está reconocida en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura (Ley Valech).

2.- Que fue detenida por militares el 11 de septiembre de 1973 en su domicilio ubicado Almirante Barroso, Santiago, quienes la trasladaron al Ministerio de Defensa y posteriormente al Estadio Chile, durante su detención fue violentada psicológica y físicamente, siendo violada por sus captores, obtuvo su libertad el 16 de septiembre, después estuvo refugiada en la embajada de Venezuela, su país de origen, durante un mes y luego regreso a dicho destino.

3.- Que la actora en su calidad de víctima de represión política ha recibido por aplicación de las Leyes 19.992 y 20.874, la cantidad de \$31.487.493 por concepto de pensión, aporte único y aguinaldos; asimismo, percibe una pensión mensual, actualizada al mes de junio de 2022, de \$227.185.

SEXTO: Que, resulta necesario y oportuno dejar consignado que el 11 de Noviembre de 2003, transcurridos 13 años desde que se restableció el Estado de Derecho en nuestro país, durante el gobierno del Ex Presidente, S.E Ricardo Lagos Escobar, se dictó el Decreto N° 1040, mediante el cual se creó la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el Esclarecimiento de la Verdad acerca de las Violaciones de Derechos Humanos en Chile”, cuyo objetivo, de acuerdo a las palabras del propio gestor, fue



Foja: 1

determinar el universo de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, entre Septiembre de 1973 y Marzo de 1990; que se materializó en un Informe que consta de más de 500 páginas, elaborado con 28.000 testimonios considerados válidos (se recibió testimonio de 35.865 personas, residentes en Chile como en el extranjero); de los que, con la debida prudencia y cautela, se dejó constancia en el mismo informe, sin individualizar nombres ni algún otro dato personal, sino únicamente el sexo del declarante, y el lugar en que fue detenido.

Conjuntamente con el informe, la Comisión elaboró un listado con los nombres de las personas a quienes se les reconoció la calidad de Presos Políticos y Torturados, con un total de **27.153** personas.

SEPTIMO: Que, posteriormente, y con ocasión del resultado de la labor de la Comisión, fue dictada la Ley N° 19.992, publicada con fecha 24 de Diciembre de 2004, que “Establece Pensión de Reparación y Otorga otros Beneficios a Favor de las Personas que indica”, cuyo artículo primero, contenido en el Título I “De la pensión de reparación y bono”, dispone: *“Establécese una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo “Listado de Prisioneros Políticos y Torturados”, de la Nómina de personas reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.”*

El artículo segundo, establece que la pensión anual aludida, ascendería a \$1.353.798.- para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad; a \$1.480.284.- para aquellos beneficiarios mayores de 70 o más años pero menores de 75 años; y a \$ 1.549.422.- para aquellos beneficiarios de 75 o más años de edad; pensión que se pagaría en 12 cuotas mensuales de igual monto, reajutable conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979, o en las normas legales que reemplacen dicha disposición.

Su inciso segundo, establece que la pensión referida, sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881,



Foja: 1

pudiendo quiénes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento; precisando que las personas que ejercieran dicha opción, tendrían derecho a un bono de \$ 3.000.000.-, el que se pagaría por una sola vez dentro del mes subsiguiente de ejercida la opción.

El artículo séptimo, dispone que tanto la pensión como el bono se devengarán a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha en que los beneficiarios presenten sus solicitudes, mismas que podrían impetrarse desde la publicación de la misma ley.

OCTAVO: Que, por otro lado, mediante la Ley N° 20.874, publicada con fecha 29 de Octubre de 2015, que “Otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile”, de acuerdo a su artículo primero, se otorgó un aporte único en carácter de reparación parcial, de \$1.000.000.-, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

El inciso tercero, dispone que: *“Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.”*

NOVENO: Que, en cuanto a la demandante Lidia Cecilia Bottini Marín, cédula de identidad 7.749.858-3, detenta la calidad de “Prisionera Política y Torturada”, constando en autos que ha percibido, en tal calidad, las sumas señaladas en el motivo quinto de este fallo, lo que lleva a establecer que la actora ha sido y es beneficiaria de la Leyes 19.992, 19.234 y 20.874.

DECIMO: Asentado lo anterior, toca referirse a las defensas del Fisco, primeramente alegó la excepción de reparación integral o satisfactiva,



Foja: 1

fundada, como ya se explicitara, en que el actor ha sido indemnizado, en razón de haber recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N° 19.992 y 20.874; resultando en consecuencia improcedente ser indemnizados por daños cuya génesis radica en los mismos hechos.

Al respecto, es necesario señalar que tal como lo sostuvo la jurisprudencia la Comisión Valech no pretendió, en estricto rigor, efectuar una “transacción” con cada uno de los beneficiados, para así precaver la interposición de una acción como la del caso de autos; cuestión que no aparece del tenor literal de la ley, ni tampoco de su espíritu, toda vez que en ella se establece que la pensión sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encontraren en tal situación optar por uno de dichos beneficios en la forma que determine el Reglamento; situación de la que resulta entonces concluir que, no obstante ser el actor beneficiario de la pensión otorgada por el Estado, en su condición de “prisionero político torturado”, tal hecho no es óbice para que el afectado interpusiera la acción indemnizatoria del caso de autos.

Por lo demás, la situación que afectó a la demandante está dentro de lo que la teoría del derecho de daños estima procedente, en orden a reparar el daño causado y nada más que el daño, centrando la función primordial de la reparación en la víctima. Así, si el Estado es culpable por los atentados a la dignidad humana, la responsabilidad civil se concretiza en la teoría de daños, cuya función esencial es su reparación, efecto que a su vez se radica en el patrimonio del Estado quien tiene el deber de repararlo, entre otras formas, por indemnizaciones pecuniarias.

En tal sentido, está acreditado que la demandante fue sometida a una detención ilegal, durante la cual fue violentada psicológica y sexualmente por sus captores. Por consiguiente, el daño que reclama se enmarca en el daño moral y la indemnización por ese daño es una manera de abordar la reparación, pues no se pueden borrar los hechos, y se configura la obligación de otorgar una indemnización pecuniaria que compense el daño causado que



Foja: 1

no ha sido íntegramente reparado, por lo que la excepción de pago y/o reparación integral opuesta por el Fisco no podrá prosperar.

UNDECIMO: Que, el Fisco también opuso la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria, fundada en los argumentos explicitados con anterioridad en el presente fallo.

Al respecto sólo caber tener especialmente presente que del tenor literal del Artículo 5° de nuestra Carta Fundamental, fluye que el ejercicio de la soberanía se realiza por el pueblo a través del plebiscito y también, se realiza por las autoridades que la misma Constitución establece; y que dicho ejercicio, reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; y es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Por consiguiente, a través de dicha disposición constitucional, se incorporan al derecho nacional las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales, entre las que destaca el deber de indemnizar o reparar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos; adquiriendo rango constitucional.

Al respecto la Excm. Corte Suprema, en los autos Rol **22.856-2015**, de fecha 29 de Diciembre de 2015, ha señalado al respecto que, *“tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que instaura el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la innegable existencia de los daños y concedió*



Foja: 1

también a los familiares de aquellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En esta línea discurren también SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras.

Por ende, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente.

Por lo demás, la reparación integral del menoscabo no se discute en el plano internacional, ni se circunscribe a los autores de los crímenes exclusivamente, sino también se prolonga hacia el mismo Estado. La preceptiva internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, desde que, sin duda, siempre ha existido, con evolución de las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho violentado.”

En conclusión, según lo expresado precedentemente, las excepciones de prescripción principal y subsidiaria serán desestimadas, por encontrar ambas su fundamento en normas de derecho interno, preceptos que, como ha quedado claramente explicitado en el presente fallo, no son aplicables al caso de autos.

El argumento anterior, además ha sido reiterado recientemente en un fallo de fecha **6 de junio pasado**, que señala en su considerando “...**Octavo:** *Que, en suma, pesando sobre el Estado la obligación de reparar a las víctimas y sus familiares consagrado por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, el derecho interno no deviene en un argumento sostenible para eximirlo de su cumplimiento. No sólo por lo ya expresado*



Foja: 1

sino porque este deber del Estado también encuentra su consagración en el derecho interno. En efecto, el sistema de responsabilidad del Estado deriva además del artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetar su acción es el de responsabilidad; y, consecuentemente con ello, en su artículo 4° dispone que “el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”. “Así, no cabe sino concluir que el daño moral causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad en que se funda la presente acción, debe ser indemnizado por el Estado”. C.S Rol N° 130.949-2020.

DUODECIMO: Que, habiéndose desestimado las excepciones de reparación integral y de prescripción de la acción civil, toca pronunciarse sobre la procedencia de la indemnización pretendida.

Como se ha venido expresando, se encuentra acreditado que la actora Lidia Cecilia Bottini Marín, detenta la calidad de “Prisionera Política y Torturada”, por lo que es del todo plausible sostener que la detención y vejámenes que padeció, se debieron al hecho de ser una estudiante extranjera (venezolana), pues señaló que no era activista política, lo cual tiene lógica en el contexto que ocurrió su detención, como consta en los antecedentes allegados a la carpeta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, acompañada a folio 1.

Siendo estas las circunstancias que motivaron su detención y posterior tortura física y psicológica, es pertinente señalar que los actos ejercidos por agentes del estado en su persona, debieron necesariamente afectar su estado físico y emocional, de manera inmediata y durante todo el período que estuvo detenida, como también en los tiempos futuros.



Foja: 1

Asimismo, con el mérito de los informe particular de daños psicológicos, elaborado por el equipo de PRAIS acompañado a folio 26, en armonía con la prueba testimonial rendida en autos, que ponderada en forma legal hace plena prueba respecto de los dichos de los testigos, unido a los hechos acreditados en la causa, es posible establecer una presunción grave, precisa y concordante en cuanto a que una persona que ha sido violentada física y psicológicamente por agentes del Estado, como en el caso de la demandante Lidia Cecilia Bottini Marín, sufrió daños emocionales cuyas secuelas son permanentes y deben ser reparadas, por cuanto es deber del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana como son la integridad física y psíquica, no siendo tolerable bajo ningún respecto que sus agentes hayan lesionado los derechos fundamentales de la demandante, por lo que el Estado debe responder.

DECIMO TERCERO: Así las cosas, el daño experimentado por la actora sólo se puede enmarcar dentro de aquél denominado “moral”, por lo que resulta plausible entonces acoger la demanda, y tal circunstancia conlleva a determinar los perjuicios que las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos sufrieron en el régimen militar.

Ello es una cuestión de ponderación y valoración que se le impone al tribunal, con el objeto de establecer y precisar los daños, la aflicción y el dolor, mismos que no solo son posibles de presumir fundadamente, sino también por el principio de normalidad, que indica que cualquier persona que es o ha sido objeto de apremios ilegítimos y tortura por agentes del Estado sufre un daño que debe ser reparado.

En esta labor de determinación del quantum indemnizatorio, este sentenciador considera como aspectos relevantes las siguientes circunstancias: **(a)** que la demandante detenta la calidad de “Prisionera Política y Torturada”, y en tal condición fue sometida a una detención ilegal, en la cual fue vejada por agentes del Estado quienes lesionaron sus derechos fundamentales a la integridad física y psíquica; y **(b)** las indemnizaciones fijadas por los tribunales superiores de justicia en circunstancias análogas.



Foja: 1

DECIMO CUARTO: Sin perjuicio de lo anterior y que, además, se viene desestimando la excepción de reparación integral y/o satisfactoria, este sentenciador es del parecer de considerar en la indemnización final, los montos percibidos por la demandante al amparo de las Leyes 19.992 y 20.874, por concepto de pensiones, aporte único y aguinaldos, teniendo para ello la naturaleza de las pensiones otorgadas por el Estado en este tipo de materias.

En efecto, el hecho dañoso que motivó la dictación de las leyes de reparación, a saber ley 19.992 y ley 20. 874, entre otras, fue el hecho ilícito del actuar de los agentes del Estado hacia víctimas que sufrieron persecución política, según quedó así recogido en el Informe Valech. Enseguida, debe tenerse especial atención que el hecho ilícito es la causa adecuada del beneficio y del daño, es decir, que tanto el beneficio como el daño provienen del mismo hecho ilícito.

En este aspecto, las leyes de reparación fueron una reacción positiva del Estado tendientes a lograr intentar reparar el daño causado, lo que en ningún caso inhibe o coarta el derecho a que las personas que se sienten perjudicadas o insatisfechas accionen y soliciten la reparación integral de su daño.

A mayor abundamiento, tanto las leyes dictadas al efecto como las indemnizaciones otorgadas por los tribunales cumplen una función reparadora de daños, que emana de la misma naturaleza, cual es el daño moral, siendo ambas compatibles y complementarias.

Así las cosas, la regla de la *Compensatio lucri cum damno* es un principio de imputación de daños, dentro de la teoría del derecho de daños y la reparación integral, por lo que emanando el mismo daño del actuar ilícito de los agentes del Estado, teniendo además la misma naturaleza cual es la reparación del daño moral por ser víctimas de la Responsabilidad del Estado, el monto ya referido y otorgado estos años debe ser considerado en la suma final a recibir por parte de las víctimas, tal como en el mismo sentido resolvió la Corte de Apelaciones de esta ciudad en el Ingreso Corte 1763-2020.



Foja: 1

DÉCIMO QUINTO: Que por otro lado considerar el monto que han recibido la demandante no significa descartar la premisa fundamental de que todo daño debe ser íntegramente reparado. Citando al profesor Llamas Pombo *“difícil es ponderar la correcta valoración del sufrimiento, la pena, angustia, las vivencias desagradables e incluso el trauma psíquico, más aún traducir a una categoría diferente la de la reparación económica de los daños morales y ello queda en definitiva a la prudencia de los tribunales, dentro de los límites de las pretensiones resarcitivas producidas en la causa”* (Eugenio Llamas Pombo. “Las formas de prevenir y reparar el daño”. Wolters Kluwer, España 2020, pág.203.)

Por su parte, en la doctrina nacional, la profesora Domínguez Hidalgo refiere que la forma predilecta y más eficiente de tutela personal es la acción indemnizatoria. En la especie, la *acción de responsabilidad civil alcanza esa eficiencia porque es la única acción civil que se funda precisamente solo en la condición de persona. Siguiendo a López Jacoste, la responsabilidad civil se ha constituido en una garantía genérica de plenitud personal* (Carmen Domínguez Hidalgo. “El Principio de reparación integral en sus contornos actuales”, Thomson Reuters, año 2019, pág. 87)

En consecuencia, es perfectamente posible la compatibilidad entre los beneficios pecuniarios otorgados por las leyes de reparación con las indemnizaciones que otorga el poder judicial, y no se inhibe conceder un monto por el daño extrapatrimonial por todo aquello que se estime que no ha sido reparado. Se cumple así el principio de reparación integral del daño, cuyo reconocimiento en la doctrina es aceptada como la función primordial del derecho de daños y que permite además, dar fuerza a los argumentos propios de la responsabilidad civil.

Conviene destacar que la Ley 19.992 en su mensaje destaca que *“la prisión política y las torturas constituyeron una práctica institucional del Estado que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición histórica de Chile”*. Eso hizo necesario la dictación de la ley en reconocimiento a aquellas



Foja: 1

víctimas y debe el Estado “*entregar una compensación que, aunque sea austera, es una forma de reconocer su responsabilidad en lo ocurrido.*”

DÉCIMO SEXTO: Considerando todos los aspectos precedentemente expuestos, se fijará la indemnización de perjuicios, por daño moral, que deberá pagar el Estado al demandante, en su calidad de víctima de violación a sus derechos fundamentales en la suma única y total de **\$50.000.000, (cincuenta millones de pesos)**, la que se estima justa y equitativa, considerando que la actora es beneficiaria de las leyes de reparación respectivas ya indicadas.

El monto indemnizatorio fijado, deberá pagarse debidamente reajustado desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada; más los intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables desde que el Fisco incurra en mora, esto es, desde la notificación del cumplimiento incidental.

Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 254, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; el Decreto 1040, de 26 de Septiembre de 2003, la Ley 19.992 y la Ley 20.874;

SE DECLARA:

1.- Que **se rechazan** las excepciones opuestas por el Fisco demandado.

2.- Que, **se acoge** la demanda intentada a folio 1, y se condena al Fisco de Chile a pagar a Lidia Cecilia Bottini Marín, la suma única y total de **\$ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos)** en la forma señalada en el considerando **décimo sexto**.

3.- Que, no se condena en costas al demandado.

Regístrese, notifíquese y elévese en consulta si no se apelare.

Dictada por Wilson Eduardo Rodríguez Rodríguez,
Juez Suplente del Primer Juzgado Civil de Santiago.-
(Fgm).-

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiuno de Diciembre de dos mil veintitrés**



